

## INTERPONEMOS RECURSO DE REVOCATORIA

**JUICIO:** SESTO CABRAL MARÍA EUGENIA Y GONZÁLEZ EXEQUIEL ELÍAS c/  
AGROPECUARIA DON EDUARDO S.A. Y OTRA s/ AMPARO. Expte. 149/23

Señora Jueza Civil y Comercial Común

**María Eugenia Sesto Cabral y Exequiel Elías González**, amparistas en autos,  
con el patrocinio letrado de **Adriana García Romano**, a V.S. respetuosamente decimos:

### **I. OBJETO**

En tiempo y forma interponemos recurso de revocatoria contra el punto VIII de la providencia de fecha 19-4-2024.

Por las razones que expondremos, solicitamos que se haga lugar al remedio procesal aquí deducido.

### **II. ADMISIBILIDAD DE LA VÍA**

Como señala Luis Ramón Madozzo en la obra colectiva “*Código Procesal Constitucional de Tucumán, concordado, comentado y anotado, Ley 6.944*”<sup>1</sup>, aunque el recurso de revocatoria no está expresamente legislado en el CPC, tampoco está proscripto, y los tribunales locales se han inclinado a favor de su admisión.

### **III. FUNDAMENTOS DE LA REPOSICIÓN**

El proveído impugnado decide ordinarizar el presente amparo ambiental, sobre la base de los siguientes fundamentos:

*“Atento a la naturaleza de la cuestión que se discute en autos y a **la complejidad probatoria que reviste**, que luce manifiesta a partir del **extenso reclamo formulado y ampliado en varias oportunidades por los propios actores**, estimo que corresponde imprimir al presente proceso, el trámite del proceso ORDINARIO, que posibilite un marco de conocimiento amplio y la producción de pruebas sin limitaciones temporales que sean incompatibles con estas.”*

*“Ello así, además, para garantizar el derecho de defensa de todas las partes intervinientes en autos y **conforme jurisprudencia de la Corte Suprema de***

---

<sup>1</sup>HAEL Juana Inés y PERAL Juan Carlos, Bibliotex, 2014, comentario al art. 28, p. 150.

**Justicia de la Nación** que reza: "Los jueces tienen amplias facultades en cuanto a la protección del ambiente y pueden ordenar el curso del proceso, e incluso darle trámite ordinario a un amparo (causa: **"Asociación de Superficiarios de la Patagonia c/ Y.P.F S.A y otros"**, Fallos: 327:2967) o bien dividir las pretensiones a fin de lograr una efectiva y rápida satisfacción en materia de prevención (**"Mendoza"**, Fallos: 329:2316)...".

Aunque somos conscientes de las amplias facultades que posee V.S. como directora del proceso, nos permitimos disentir con el criterio adoptado por considerar que el amparo constituye la vía idónea para canalizar la pretensión de nuestra parte.

### **1. La amplitud del debate no constituye óbice para el amparo ambiental**

En el escrito modificatorio de la demanda, específicamente en el capítulo VIII. titulado "Admisibilidad del amparo" (punto 2), sostuvimos que la amplitud del debate no constituye óbice para el amparo ambiental.

En apoyo de lo postulado destacamos que la propia Corte Federal revalorizó el amparo como medio eficaz y efectivo de la tutela del ambiente, en el precedente **"Comunidad Indígena del Pueblo Wichi Hoktek T'Oi c/ Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable"** (sentencia de fecha 11-7-2002; Fallos 325:1744), donde dijo que

*"..., constituye un exceso de rigor formal sostener que las cuestiones requerían mayor debate y prueba, pues, a fin de determinar la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, resultaba suficiente controlar que los actos impugnados hubieran respetado los procedimientos exigidos por la legislación provincial y nacional vigentes para autorizar la actividad. A tal fin, bastaba con examinar si, de conformidad con las normas invocadas por la actora, la autorización y prórroga de la actividad en cuestión requería una evaluación previa de impacto ambiental y social, y si se había respetado lo dispuesto por el art. 75, inc. 17, de la Constitución Nacional."* (considerando 5°)

En idéntica senda Aníbal J. Falbo<sup>2</sup>, destaca el carácter indiscutible de la acción de amparo ambiental, en tanto vía judicial rápida, expedita, urgente; como una de las más idóneas para resolver con eficacia conflictos de tipo ambiental. Y citando el mentado precedente del tribunal cimero de la nación, señala que en esa misma línea, jueces y tribunales de todo el país han aceptado como vía idónea el proceso de amparo para defender el ambiente.

---

<sup>2</sup> "Derecho Ambiental", Librería Editora Platense, La Plata, 2009, ps. 260-261.

Efectivamente se ha considerado que “... **la mayor amplitud de debate no es obstáculo para el amparo ambiental**, y sin que ello en el caso sub examen pueda ser óbice para el acceso a la jurisdicción (art. 33 de la C.N.; 8.1 y 25 de la CADH y específicamente, el propio art. 30 de la LGA que establece “El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie”).” (Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala A, “Ulla, Laura y otros c/ Fidela Delia Ribas y Eduardo Ramón Ribas S.H. y otro s/ Amparo Ambiental” Expte. 42129/2014, sentencia del 1-4-2015).

Puntualmente en materia de fumigaciones con plaguicidas, en el emblemático fallo “San Jorge”<sup>3</sup>, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe, ponderó lo siguiente:

“Que a su vez y desde otro vértice, **insiste la recurrente que atento la importancia y trascendencia de la cuestión debatida resulta conveniente un ámbito de debate amplio y de demostraciones científicas necesarias, no constituyendo la vía del amparo -por la estrechez de sus términos- el trámite adecuado.** Al respecto, y habiendo examinados los autos, **me permito señalar enfáticamente que la cuestión no requiere de mayor amplitud en cuanto a "debate y prueba".** Pues bien, por medio del presente **se discute sobre actos que atentan contra el medio ambiente, repercutiendo de manera directa en la salud de los vecinos** de la ciudad de San Jorge, lo que importa que **existe un factor de urgencia que no puede ser atendido si no es por medio del amparo;** así lo plantearon los actores y así lo entendió el juez a quo, al franquear esa vía con respaldo constitucional. Al respecto Gozaíni afirma que ubicar el contenido específico de la pretensión para comparar las posibilidades del amparo ante los demás procesos comunes será tarea para la función jurisdiccional, pues al abrirse el abanico de materias protegidas como “nuevos derechos y garantías”, presenta como hipótesis que **la única vía útil y efectiva sea la garantía procesal del art. 43.** Por eso cuando debamos referirnos a la necesidad de un debate mayor, el núcleo de atención habrá de radicar en el objeto material solicitado y en las facultades de actuación efectiva que tenga la magistratura para obrar con la rapidez y expeditividad que está reclamando el amparo. Y sabiamente afirma este autor que **la brevedad que caracteriza al amparo no afecta el conocimiento del juez sobre el foco litigioso, en tanto el amparista no sufre cortapisas en su derecho de alegación, siempre que conduzca la denuncia al**

---

<sup>3</sup> “Peralta, Viviana c/ Municipalidad de San Jorge y otros s/ Amparo” Expte. N° 198 - Año 2009, sentencia de fecha 9-12-2009.

**problema constitucional; que el sujeto pasivo tampoco sacrifica el derecho al contradictorio; y que la mejora en el debate no se logra postergando al amparo o remitiendo la causa a un procedimiento diferente que, "mutatis mutandis", no tiene la especialidad que goza el proceso constitucional** (Gozáini, Osvaldo Alfredo "El Derecho de Amparo", Ed. Depalma, 1995, pág. 43 y 44)."

En ese orden de ideas, José Alberto Esain<sup>4</sup> señala también que **cuando la violación es manifiesta, y además necesita de una urgente solución** para restablecer la indemnidad del ambiente dañado, el proceso más adecuado será el de naturaleza constitucional. Allí es donde aparece el amparo como medio de protección inmediato y eficaz del derecho de naturaleza constitucional evidentemente violado con base en el art. 43 de la CN.

Y reforzando lo anterior el mentado autor enfatiza que *"...el amparo ambiental tiene base en los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional. Pero además de esa norma la acción ha sido "integrada" por las nuevas disposiciones de la ley 25.675 General del Ambiente. Allí expresamente en el tercer párrafo del artículo 30 se ha reglado una especie específica de acción por cese del daño ambiental dentro de la vía procesal amparística."*

## **2. Notorias diferencias entre el sub lite y los precedentes invocados**

A lo anterior se añade que existen marcadas notas distintivas entre el caso sujeto a examen y la jurisprudencia ambiental invocada. Veamos cuáles son:

i) En primer término in re **"Asociación de Superficiarios de la Patagonia c/ YPF S.A y otros s/ daño ambiental"** (CSJN, sentencia del 13-7-2004, Fallos 327:2967), la actora inició demanda ante la Corte Federal, contra Y.P.F. S.A. y las concesionarias de la explotación y exploración de las áreas hidrocarburíferas de la "Cuenca Neuquina", cuencas hídricas de los ríos Negro y Colorado, a fin de que se las condene a: 1) **Realizar las acciones de recomposición integral de los daños colectivos ambientales** causados por la actividad que desarrollan en dicha área, y para la reposición a su estado anterior de las extensas áreas desforestadas y sin vegetación, de modo tal de revertir el proceso de desertificación causado. 2) **Construir el fondo de restauración ambiental** (art. 22, ley 25.675). 3) **Adoptar todas las medidas necesarias para evitar esa clase de perjuicios** y, subsidiariamente, obtener la **reparación de daños y perjuicios** colectivos.

---

<sup>4</sup> "El amparo ambiental, su fórmula legitimatoria frente a las diferentes acciones derivadas del daño ambiental de incidencia colectiva ¿el desembarco de la acción popular ambiental?", publicado en Doctrina Judicial, año XXII, nro. 18, fechada el 3.5.06, pp. 1.

Asimismo, la demandante solicitó que se cite como terceros a las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro, en tanto sus patrimonios ambientales se hallaban alcanzados por el daño que se intentaba recomponer y dado que les resultaría obligatoria la sentencia que se dicte en la medida en que se requería su intervención en la constitución y regulación del Fondo Común de Compensa, y por ser partes de la Comisión Interprovincial del Río Colorado, y junto con el Estado Nacional, de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Y peticionó que se cite también al Defensor del Pueblo y al Estado Nacional a través de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

En ese contexto es que el tribunal cimero de la nación entendió que *“el trámite que ha de imprimirse a esta causa no puede ser el del amparo, pues las medidas probatorias necesarias para la dilucidación de los eventuales daños ocasionados por la actividad de las demandadas exigen un marco procesal más extenso. De la sola consideración del ofrecimiento de pruebas de la interesada (ver fs. 67 y sgtes.) se impone tal temperamento, de modo que resulta adecuada la adopción del régimen ordinario (Fallos: 270:69; 312:2103, entre muchos otros)”* (considerando 3°).

ii) Por su lado, la causa **“Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios - daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo”** (CSJN, sentencia del 20-6-2006), se trató de una demanda de daños y perjuicios iniciada en 2004 por un grupo de diecisiete personas, ejerciendo derechos propios, y algunas en representación de sus hijos menores, contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas, por la que reclamaron la recomposición del ambiente, la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo y un resarcimiento económico por daños y perjuicios. Luego se amplió hacia los 14 municipios bonaerenses por los que se extiende la cuenca.

Allí, la Corte Federal se declaró competente en su instancia originaria con respecto a las pretensiones concernientes a la prevención, recomposición y el resarcimiento del daño ambiental colectivo, pero se declaró incompetente para conocer sobre el resarcimiento de los daños y perjuicios individuales reclamados.

De lo expuesto se advierte la mayor complejidad de los precedentes referenciados que, entendemos, no guardan similitud con estos actuados, debido a las múltiples pretensiones deducidas -incluidas patrimoniales-, la cantidad ingente de sujetos pasivos, entre ellos provincias, municipios y el Estado Nacional y un número significativo de empresas.

En la especie la extensión de la demanda se justifica en la necesidad de poner en conocimiento de V.S. las distintas aristas que abarca la problemática en materia de agroquímicos, y a partir de allí focalizar en el núcleo del debate y de nuestra pretensión que persigue: 1) El ***cese inmediato de fumigaciones terrestres a menos de 1000 metros del perímetro de nuestra vivienda familiar*** donde además se asienta nuestra huerta agroecológica con ningún tipo de producto agroquímico en los fundos colindantes a nuestro inmueble. 2) ***Evitar la continuación y agravamiento del proceso de daño ya iniciado*** por las ***13 pulverizaciones*** llevadas a cabo en fundos explotados por la demandada con un ***cóctel de plaguicidas altamente tóxicos y contaminantes del ambiente*** (2,4D sal amina, MSMA, atrazina, fluroxipir meptil, herbicida Starane, glifosato y sustancias coadyuvantes), a ***cero metros*** en algunos casos y en otros a muy corta distancia de nuestro hogar y ***en flagrante inobservancia de la normativa local en la materia (Ley 6.291 y su Decreto Reglamentario 299/96)***, que afecta nuestros derechos fundamentales a vivir en un ambiente sano, a la vida y a la integridad personal, a la salud y a la alimentación adecuada.

Note V.S. que, con relación a las sucesivas ampliaciones, dos de ellas se debieron a nuevas pulverizaciones llevadas a cabo por la demandada durante el trámite del juicio que reconfiguraron los hechos invocados. En cuanto a la faz pasiva, si bien fue ampliada en su oportunidad -a partir de lo informado por los requeridos (art. 21, CPC) y los instrumentos por ellos adjuntados- con el desistimiento formulado en escrito modificadorio del 15-4-2024 quedó circunscripta a dos accionados que son quienes explotan los fundos linderos a nuestra propiedad. Y en referencia a la complejidad probatoria, entendemos que en el caso concreto de autos, al igual que en el precedente “San Jorge”, no se requiere una mayor amplitud de debate y prueba, por estar en presencia de actos que afectan de manera directa la salud de las personas aquí amparistas -como ha sido constatado con los certificados médicos adjuntados que acreditan las intoxicaciones agudas sufridas y los síntomas recurrentes padecidos en cada aplicación-, alterando por complemento nuestra calidad de vida, lo que torna ostensible el factor de urgencia únicamente atendible por la vía del amparo. Desde ese enfoque el tema a decidir se constriñe a determinar si la demandada ha incumplido la normativa específica sobre agroquímicos vigente en nuestra Provincia en las pulverizaciones oportunamente denunciadas.

#### **IV. PARA CONCLUIR: INCUESTIONABLE NATURALEZA AMBIENTAL DE LA ACCIÓN INTENTADA**

De confirmarse la ordinarización del trámite del amparo de marras, dejamos sentado que ello no puede implicar en ningún caso la alteración de la naturaleza de la acción deducida.

Lo que se modifica es la tramitación del proceso, el tipo de proceso, pero no

el objeto ni la pretensión deducida por nuestra parte en la demanda que reviste índole estrictamente ambiental como se desprende del objeto del escrito postulatorio (capítulo III.).

Consecuentemente, y en virtud de la naturaleza ambiental del sub examine - sea que tramite por la vía del amparo o del proceso ordinario- ponemos de manifiesto la necesaria complementariedad en un verdadero diálogo de fuentes con los estándares procesales fijados por la Ley General del Ambiente n° 25.675 (arts. 30, 32 y 33) y el Acuerdo de Escazú (aprobado por ley 27.566); normativa ambiental que, como enfatiza Ricardo Lorenzetti<sup>5</sup>, "prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga" y que "esta es una regla de "precedencia" lógica, que determina que, en casos de conflictos de fuentes, **el juez debe aplicar de modo prevalente la que tutela el bien ambiental.**

#### **V. PETITORIO**

Por lo expuesto a V.S. pedimos que:

1. Tenga por interpuesto recurso de revocatoria contra el punto VIII de la provincia de fecha 19-4-2024 que dispone la ordinarización del sub lite.

2. Haga lugar, sin sustanciación al remedio deducido.

Resolviendo de conformidad

**HARÁ JUSTICIA**

  
Excmo. Sr. Jefe de Sala  
31/6/15

  
Mtro. Eugenio  
Sesto Cabal  
26685490

---

<sup>5</sup> "Teoría del Derecho ambiental", La Ley, Buenos Aires, 2008, ps. 74 y 75.